

CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN**NÚMERO 1141/2024**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Expte.: 007/2025UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP),

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato de Servicios titulado: **“ASISTENCIA Y DEFENSA JURÍDICA A MENORES TUTELADOS POR LA COMISION DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL ÁMBITO PENAL ESPECIFICO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000 DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR (LORPM)”** a propuesta de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, cuya adjudicación se efectuará por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios de adjudicación, al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2 de la LCSP, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

El artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, previene la posibilidad de que las personas menores de edad puedan solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses; todo ello sin perjuicio de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal para actuar en defensa de los derechos de los menores.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad asume las competencias en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid en materia de protección de los menores en situación de desamparo y en concreto, a través de la Comisión de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, adopta las medidas de protección necesarias para su guarda.

El artículo 27.2 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid establece que *“La Comunidad de Madrid proporcionará asistencia y defensa letrada a todos los niños que se encuentran en el sistema de protección sin restricciones ni riesgos para la confidencialidad y en un espacio de confianza. En el caso de aquellos que pudieran resultar penalmente responsables con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, la Comunidad de Madrid les facilitará asistencia y defensa letrada, a través de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, para que puedan, a su elección, ejercitar las acciones correspondientes a través de este medio o ser defendidos por abogados especializados del turno de oficio”*, por lo que la licitación de este contrato viene a dar cumplimiento a esta obligación legal.

Dicha asistencia y defensa letrada se realiza de forma directa, desde el conocimiento del caso y del expediente de protección del menor, pudiendo así dar mejor respuesta a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM), aprobada el 12 de enero de 2000, en todo lo referido al carácter educativo de la medida adoptada, en coordinación con el proyecto educativo del menor en su centro de protección y/o programa de acogimiento.



El artículo 27.2 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, establece que *“La Comunidad de Madrid proporcionará asistencia y defensa letrada a todos los niños que se encuentran en el sistema de protección sin restricciones ni riesgos para la confidencialidad y en un espacio de confianza.*

En el caso de aquellos que pudieran resultar penalmente responsables con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, la Comunidad de Madrid les facilitará asistencia y defensa letrada, a través de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, para que puedan, a su elección, ejercitar las acciones correspondientes a través de este medio o ser defendidos por abogados especializados del turno de oficio”.

Con ocasión de una licitación anterior con el mismo objeto, se evacuó el día 1 de julio de 2008 un primer informe por los servicios Jurídicos en la entonces Consejería de Familia y Asuntos Sociales, en el que se concluía que este contrato no suponía una externalización de funciones propias de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid porque la defensa de menores tutelados no formaba de la actividad del Cuerpo y que su eventual exención implicaría entrar en conflicto de intereses con las actividades que tienen que ejercer legalmente.

El informe del Servicio Jurídico nº 307/2014 de fecha 27 de junio, evacuado por la Letrada Jefe de los Servicios Jurídicos de la entonces Consejería de Asuntos Sociales vino a establecer la misma conclusión y estableció que *“corresponde a la Comisión de Tutela del Menor designar abogado cuando éste se encuentre detenido o a disposición judicial, y supondría una dejación de las funciones que le son propias dar lugar a que esa designación se efectuase de oficio”.*

Señala asimismo el informe que *“La dicción literal de los arts. 1 y 2 de la Ley 3/1999 de 30 de marzo de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, no deja lugar a dudas, aparte del asesoramiento y defensa de la Comunidad de Madrid, entendida en su más amplio sentido, las únicas personas físicas respecto de las cuales, el legislador ha previsto su representación y defensa en juicio por los Letrados de la Comunidad de Madrid son sus autoridades, funcionarios y empleados, condición que en ningún caso concurre en los menores tutelados”.*

Por tanto, mientras se mantenga el criterio defendido por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, la asistencia y defensa letrada de los menores tutelados se debe realizar por un abogado independiente en ejercicio, no contando la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad con personal adecuado para ello, por lo que se debe recurrir a la contratación de un profesional o un despacho de abogados externo.

Madrid, a fecha de firma

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)
LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA
Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAITA
- ***6248**
Fecha: 2024.04.05 14:24